

LA DESPLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. EL CASO DE BALEARES

Alfredo Barón Pérez *

** Jefe del Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Comunidad Autónoma de Baleares (1996-2013), jubilado. baron.a@telefonica.net*

Resumen

El Plan Hidrológico de las Islas Baleares (en adelante PHIB), fue aprobado inicialmente por el Consell de Govern en febrero de 2011, tras un largo proceso que comenzó en 2004 e informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua (CNA) en marzo de 2011. Durante este proceso, se optó por una intensa participación activa, que comenzó en 2006 y que contó con casi 800 participantes de más de 300 entidades, con un total de casi 8.000 horas de trabajo. Ello dio lugar a un Plan participado, que no fue elaborado simplemente por los técnicos, sino con la colaboración de toda la sociedad.

Con el cambio de gobierno producido por las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2011, el nuevo gobierno solicitó al Ministerio, primero verbalmente y el 14 de octubre 2011 mediante un acuerdo del Consell de Govern, la paralización de la tramitación del Plan y su devolución para una revisión.

El día 12 julio de 2013 el Consell de Govern aprobó inicialmente el nuevo PHIB, que fue informado favorablemente por el CNA el 29 de julio y aprobado por el consejo de Ministros el 6 de septiembre.

Se realiza un análisis comparativo de la Normativa de 2011 y la aprobada definitivamente en 2013. Se puede comprobar que se ha consumado una estrategia de desregulación y desprotección del dominio público hidráulico que favorece únicamente los intereses del agronegocio, urbanísticos y del lobby de directores facultativos y sondistas, permitiendo un incremento de las extracciones en masas de agua en riesgo, prorrogables y excepcionables, banalizando o anulando las medidas de protección de los acuíferos contra la contaminación, tanto puntual como difusa, las de ahorro de agua, de protección ambiental, de cauces y de humedales y las de recuperación de costes.

Se analiza asimismo, la inutilidad de la participación del Consejo Nacional del Agua en el proceso de aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias y las responsabilidades de la Comisión Europea en el proceso de incumplimiento de los plazos.

1. Antecedentes

La elaboración del Plan, ha seguido un largo proceso que comenzó en 2004 siguiendo las fases establecidas: Caracterización de la Demarcación Hidrográfica (art. 5 y 6 de la DMA). Temas importantes. Borrador del PH. En todas estas fases, se ha potenciado la participación activa con un total de 31 Talleres intersectoriales con 773 participantes, más de 300 entidades, una jornada científico-técnica final así como una reunión interdepartamental y dos reuniones con la federación de municipios.

A su vez la elaboración del Plan ha representado un ingente esfuerzo técnico (y económico) para cumplir con la DMA. Se ha caracterizado el estado ecológico de las aguas costeras baleares, utilizando los indicadores establecidos por la DMA (fitoplancton, nutrientes, macroalgas, macroinvertebrados bentónicos y Posidonia), las aguas epicontinentales: torrentes y humedales (indicadores fisicoquímicos, diatomeas, macroinvertebrados) y el estado cuantitativo (niveles piezométricos) y químico de las Masas de Aguas Subterráneas (Cl^- , NO_3^- , etc), incluyendo el análisis de las sustancias prioritarias.

Por lo que respecta en concreto al borrador del PH (tercera fase del proceso), fue sometido a participación y consulta pública, por un período de seis meses (BOIB nº 143 del 9-10-2008). Tras la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, éste junto al conjunto del PHIB (Memoria, Normativa, Programas), con la incorporación parcial de observaciones realizadas en los talleres participativos, fue sometido a Información Pública, por un período de 45 días (BOIB nº 146 del 20-03-2010).

Se recibieron más de 800 observaciones, sugerencias y alegaciones. De ellas, se incorporaron más del 80% y el resto se desestimaron con respuesta motivada.

Posteriormente y en coordinación con la Comisión Balear de Medio Ambiente, se elaboró la Memoria Ambiental del Plan, tras el informe pertinente de los servicios de la misma, incluyendo en el Plan sus prescripciones. El proceso de integración de alegaciones para la elaboración del texto normativo definitivo, así como la incorporación o adaptación del mismo a las últimas normativas estatales: RD 903/2010 de 9 de julio de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundaciones y RD 60/2011 de 2 de enero, sobre Normas de Calidad Ambiental en la Política de Aguas, tuvo una duración de 8 meses.

Finalmente, en fecha 14 de febrero de 2011 el Pleno del Consejo Balear del Agua, informó favorablemente el Plan y, el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, en sesión de 25 de febrero, aprobó con carácter inicial el texto informado por el Consejo Balear del Agua. Este texto, con la documentación pertinente, se remitió a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en fecha 4 de marzo de 2011 y, fue informado favorablemente, junto al Plan de Catalunya, por el Consejo Nacional del Agua el 24 de marzo de 2011, quedando solo pendiente su aprobación por el Consejo de Ministros.

Con el cambio de gobierno producido por las elecciones autonómicas de mayo 2011, se solicitó al Ministerio, primero verbalmente en reunión mantenida el 25 de julio 2011, con el Secretario de Estado y la Directora General del Agua y posteriormente, por acuerdo del Consell de Govern de 14 de octubre del mismo año, para la revisión y modificación del Plan.

Comenzó entonces un proceso de revisión del Plan, intentando modificar las cifras del anterior, inicialmente en lo referido a las superficies regadas y a las asignaciones de agua para agricultura y posteriormente, de los balances. Ante la imposibilidad de que los técnicos del SEP las modificaran, se intentó con el CEDEX, con el mismo resultado. Todo ello para poder tener “una horquilla para escoger”.

Pero en paralelo, como se pretendía una desregulación lo más completa posible, era preciso derogar algunas normativas vigentes. Para ello, y por el procedimiento del Decreto Ley posteriormente convalidado, se promulgaron la Ley 7/2012 de 13 de junio, de Medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible y la Ley 13/2012 de 20 de noviembre, de Medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias. Con la promulgación de estas leyes ya se podía acometer la “desplanificación hidrológica”.

En efecto, en la *Ley 10/2003 de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas*, se establecía, la necesidad de autorización para extracción de volúmenes anuales menores de 7.000 m³/año, consolidando así, el Régimen Especial vigente en Baleares desde 1969. Por otra parte, en su punto 3º, párrafo 3º, se decía que, “reglamentariamente, mediante Decreto de Consejo de Gobierno, se determinarán las condiciones técnicas generales para la realización de captaciones y abandonos, a las que deberán ajustarse los proyectos y su ejecución, con el fin de garantizar la protección del dominio público hidráulico ante todo tipo de

contaminación. Para las captaciones de abastecimiento público se establecerán unas condiciones específicas”.

En cumplimiento de esta disposición, se publica el Decreto 108/2005 de 21 de octubre, por el cual se regulan las condiciones técnicas de autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas y de ejecución y abandono de sondeos en el ámbito de la Islas Baleares. En él, se prohíbe toda nueva captación en la franja de 1 Km desde la línea de costa en la isla de Mallorca y de 500 m en las islas de Menorca e Ibiza. Para captar aguas subterráneas con contenido salino equivalente al del agua del mar, se establece una distancia máxima desde la línea de costa, de 100 m. Por otra parte, el decreto regula las condiciones de cementación de sondeos y su profundidad, para acuíferos libres (en función de su litología) y para acuíferos cautivos superpuestos y multicapa, así como los métodos de descenso de tubería, corona de cementación, utilización de centradores, cierre de la cabeza de la captación, estanqueidad de la misma, desinfección, contador volumétrico, etc., así como la responsabilidad de los directores técnicos en el cumplimiento de las condiciones impuestas. Se prohíbe también las nuevas captaciones en el perímetro de restricciones máximas, 250 m, de las captaciones para abastecimiento. Se regula asimismo, el abandono de sondeos y en su Artículo 9, dice “la Dirección Gral. de Rec. Hídricos ha de establecer los medios de inspección administrativa necesarios, para controlar el debido cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el presente Decreto”.

La Propuesta de PHIB informada favorablemente por el CNA en marzo 2011, contenía (y aclaraba en el Anejo correspondiente) la Normativa en vigor desde 2005.

La Ley 7/2012 de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, en su Disposición derogatoria punto 1, apartado 1, se deroga el Decreto 108/2005 “sólo en lo que respecta a las autorizaciones de explotación de aguas subterráneas con volumen inferior a 7.000 m³/año” (al parecer se considera que, un sondeo mal construido que sólo saque 7.000 m³/año, no es una vía preferente de contaminación).

En la propuesta que ahora se presenta, se elimina la obligatoriedad de cumplir cualquier norma técnica de ejecución de sondeos, dejando, al libre albedrío de directores facultativos y sondistas, la protección del Dominio Público Hidráulico.

Hay que recordar que, como se ha dicho, la Ley 7/2012 de 13 de junio, no deroga el Decreto 108/2005 de 21 de octubre, por lo que se refiere a las concesiones. Por otra parte, el Decreto 53/2012 de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Islas Baleares, establece en su Anexo I (Programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo humano de las Islas Baleares) punto 2.3.1, apartado b:

“A fin de proteger el Dominio Público Hidráulico de cualquier tipo de contaminación, la ejecución de los sondeos se ha de ajustar a las condiciones técnicas mínimas que establece el Decreto 108/2005...”

Por tanto, la nueva Propuesta incumple la propia legislación autonómica o pretende, de forma encubierta, derogar esta legislación, sin citarla. Se considera, desde un punto de vista técnico, que las normas técnicas de construcción y abandono de sondeos, deben ser las mínimas exigibles en todas las captaciones de aguas subterráneas, sin perjuicio de que los directores facultativos, en sus “proyectos”, puedan aplicar mejores técnicas (mayor espesor de tuberías, mayor espesor de cementación, cementación a través de válvula de fondo, etc.)

El Artículo 2, punto 1, del Decreto 108/2005, repetidamente citado y vigente desde el 2005 hasta la promulgación de la Ley 7/2012, establecía: “Las nuevas autorizaciones de

explotación de aguas subterráneas en las Illes Balears, solamente se podrán conceder para caudales instantáneos máximos de 0,5 l/seg y volúmenes máximos de 200 m³/años, para viviendas aisladas en suelo rústico que dispongan de cédula de habitabilidad o acrediten una antigüedad superior al 1 de marzo de 1987 a través del correspondiente certificado municipal o dispongan de licencia municipal de obra en ejecución.....”.

El Artículo 4, punto 1, del Decreto 108/2005 dice: *“Se prohíbe toda nueva captación en la franja de 1 Km de la línea de costa en la isla de Mallorca y de 500 m en las islas de Menorca e Eivissa, exceptuadas las captaciones de agua con un contenido de sal equivalente al agua de mar, a los efectos de desalación u otros usos debidamente justificados. Estas captaciones se realizarán previa autorización, en las condiciones técnicas que se establezcan en cada caso, según las características y situación hidrogeológica del acuífero, y a una distancia de la costa no superior a 100 m, salvo casos debidamente justificados mediante el oportuno estudio hidrogeológico”.*

La Ley 7/2012 citada, deroga todos estos aspectos.

2. Comparación entre la propuesta aprobada inicialmente en 2011 y la Normativa aprobada definitivamente en 2013.

Dada la profundidad y alcance de la desregulación planteada, la comparación exhaustiva excedería el espacio disponible. Por tanto, la comparación se centra en los aspectos que se consideran más relevantes.

2.1. Torrentes

En el Plan de 2011 se establecían de manera preventiva, distancias de retiro de los cauces, entre 5 y 50 m en función del tamaño de cuenca, donde se prohibían nuevas construcciones y regadíos intensivos, salvo estudio hidráulico justificativo. Todo ello se suprime en la actual Normativa.

Se suprime cualquier referencia al Atlas de cartografía geomorfológica de llanuras de inundación, documento que servía de guía para la delimitación de las zonas inundables y se pospone a futuros estudios.

Se protegía la vegetación en la ribera, aunque fuera climácica y no estrictamente de ribera, porque en los torrentes mediterráneos, dicha vegetación climácica densificada, estabiliza los cauces y los protege frente a la erosión y la contaminación por nitratos. Se elimina todo ello y se sustituye por una lista (discutible) de especies de vegetación de ribera. Con este criterio, se pueden eliminar los setos de lentisco, de acebuche, etc.

Se potenciaban las actuaciones blandas o de ingeniería ambiental, la conectividad biológica y la recuperación del espacio fluvial. Se eliminan o se banalizan todos estos aspectos.

A falta de posibilidad de cálculo de caudales ambientales, se establecían unas limitaciones físicas para la captación. Se eliminan.

2.2. Zonas Húmedas

Se elimina la cartografía de las zonas recuperables como humedal (“humedal potencial”), incumpliendo el art. 276 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La cartografía de las zonas húmedas que figura en el nuevo Plan y que tiene carácter normativo, se especifica que es una delimitación transitoria, a la espera de la realización de una nueva cartografía, para la que se establecen unos criterios. Pero se oculta que ya existe un documento, sometido a información pública en la Propuesta del Plan de 2011, con delimitación basada en cartografía vegetal y criterios hidromorfológicos. El documento fue realizado por la Administración Hidráulica, por resolución del Conseller (año 2007), en cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración Hidráulica por el RDPH, en sus art. 276 y siguientes.

2.3. Extracciones de agua subterránea

Se fijaban distancias entre captaciones, en función de los radios de influencia, para evitar sobredensos de nivel en los acuíferos. Estas distancias iban entre 100 y 350 m para las autorizaciones y 500 m para las concesiones. En el Plan aprobado actualmente, se fija una distancia única de 100 m.

Era obligatoria la autorización administrativa, para los pozos de menos de 7.000 m³/año. Se sustituye por una declaración responsable, en las masas de agua subterránea en buen estado o en riesgo, incumpliendo la disposición adicional 15ª del TRLA.

Para el consumo disperso de viviendas aisladas en suelo rústico, se permitían caudales de 0,5 l/seg y 200 m³/año, siempre que fueran viviendas con licencia municipal, cédulas de habitabilidad o anteriores a 1987. Con la regulación actual, se permiten 400 m³/año, sin requisito de legalidad.

En las zonas costeras, se prohibía toda captación en la franja de 1.000 m desde la costa, en la isla de Mallorca, y 500 m en Menorca, Ibiza y Formentera. Con la nueva Normativa, se permiten hasta 500 m³ en toda la franja de 1.000 m desde la costa, para viviendas aisladas.

Se permitía captar agua con contenido salino equivalente al del mar, en la franja de 100 m desde la costa. Con la Normativa actual, se permite en la franja de 200 m.

Se permiten concesiones en las masas en riesgo, sin limitación de volumen anual y con una distancia de 100 m, incumpliendo la disposición adicional 15ª del TRLA. En la Normativa anterior, antes de la modificación del TRLA, se permitían concesiones de hasta un máximo de 15.000 m³/año a un mínimo de 500 m de distancia y previo estudio hidrogeológico que justificase la no afección al acuífero.

Se permiten las concesiones agrícolas en las masas de agua prorrogables y excepcionales, sin límite de volumen anual ni de caudal instantáneo y a una distancia mínima de 100 m, de acuerdo al art. 25 de la Ley 13/2012, sólo para determinadas explotaciones agrícolas e inversiones agrícolas y ganaderas, incumpliendo la disposición adicional 15ª del TRLA. En la Normativa de 2011 (anterior a la modificación del TRLA), se permitían las concesiones de hasta un máximo de 10.000 m³/año, a 500 m de distancia y previo informe hidrogeológico que justificase la no afección al acuífero.

Asignación de recursos subterráneos para agricultura.- Se incluye el consumo humano disperso en la asignación de recursos subterráneos para usos agrarios, doblando prácticamente dicha asignación respecto a las extracciones reales para agricultura. Se contraviene así la Directiva Marco del Agua, el Reglamento de Planificación Hidrológica (art. 14), la Instrucción de Planificación y entra en contradicción con el articulado del propio Plan.

Se incrementan las dotaciones máximas para regadío, por encima de los datos disponibles, de necesidades de agua según cultivos y zonas y por encima de las que figuran en la Instrucción de Planificación.

2.4. Contaminación difusa por nitratos de origen agrario

Se elimina el Anejo nº 9 de la anterior Normativa, que incluía el Plan de Acción para las zonas vulnerables, y los artículos relacionados con el mismo, con lo que se incumplen los art. 45.3 y 49.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica y el compromiso de la Administración Balear ante la Comisión Europea de incluir la obligatoriedad de estos aspectos en el Plan Hidrológico, para evitar una sanción por incumplimiento de la Directiva de Nitratos. En la actual Normativa, se sustituye todo ello por un artículo vergonzante (art. 106), que dice: *“En caso de que la Administración Hidráulica o la Administración responsable de la gestión agrícola y ganadera, detecten episodios de contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de origen agrícola y/o ganadero, se llevarán a cabo por la Administración competente en materia agraria las oportunas inspecciones. Los resultados de dichas inspecciones se remitirán a la Administración Hidráulica en el marco de la colaboración que se haya establecido a estos efectos”*.

2.5. Contaminación puntual

2.5.1. Depósitos enterrados

Se elimina el Anejo nº 8 de “Criterios de control y protocolo de actuación de descontaminación de las aguas subterráneas producida por fugas en depósitos y conducciones enterradas” y la obligación de tener piezómetros de control y todos los artículos relacionados. Se sustituye por un artículo, 108, en que se dice que la Administración Hidráulica, si detecta contaminación (se supone que ya en el acuífero), se lo comunicará a la Administración de Industria para que inspeccione las instalaciones. Menos mal....

2.5.2. Polígonos industriales

Se elimina cualquier obligatoriedad de tratamiento y gestión de las aguas industriales o de escorrentía en recintos industriales.

2.5.3. Fosas sépticas

Se sustituye la autorización de vertido o declaración simplificada de vertido, como se pide en el resto del Estado, por una declaración responsable, que permite el inicio de las obras sin ninguna autorización. Se rebajan los estándares de calidad, confundiendo el concepto de zona sensible con el de vulnerabilidad de acuíferos y se incumple el art. 253 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

2.6. Normas técnicas de captaciones, estudios hidrogeológicos y perímetros de protección

La Ley 7/2012 (*Ley Company*), anulaba el Decreto 108/2005, que fijaba normas técnicas de ejecución de sondeos, sólo para los de menos de 7.000 m³/año. El Plan actual elimina la obligación de cumplir las normas técnicas mínimas para todo tipo de captaciones, incumpliendo el Decreto 53/2012 de la CAIB, sobre vigilancia sanitaria.

Respecto a los estudios hidrogeológicos, se elimina el contenido mínimo de los mismos, fijado en el anterior Anejo 7, en función del objetivo de dichos estudios.

Se vacía de contenido los perímetros de protección, ya que pueden autorizarse canteras, sondeos, industrias contaminantes, etc. en el perímetro de restricciones máximas de 250 m. En el perímetro de restricciones moderadas de 1.000 m, se pueden instalar hasta vertederos de sustancias peligrosas sin medidas correctoras.

2.7. Control de extracciones

Se elimina todo el articulado referente a este tema, que representaba la adaptación de la Orden ministerial correspondiente (para cuencas intercomunitarias) y de hecho, una trasposición adaptada a la legislación autonómica. Se sustituye por una simple referencia a la Orden ministerial.

2.8. Modificación de la delimitación de las Masas de Agua Subterránea y gestión conjunta

Se permite modificar los límites de las masas de agua subterránea sin elaboración de ningún documento técnico justificativo, función que en la Normativa de 2011, se encomendaba a los planes de uso y gestión, en los que se especificaba la documentación técnica necesaria y su procedimiento de tramitación, ya que se suprime todo el articulado referente a ello. En cuanto a la gestión conjunta de masas “similares”, no se especifica si son contiguas o no, ni se tiene en cuenta el estado cuantitativo de las mismas. La intención declarada, de manera informal, es que “si una es excedentaria y otra deficitaria, se pueda dar un poco de agua en esta última”.

2.9. Gestión de la demanda

En el Plan aprobado inicialmente en 2011, se establecían porcentajes de reposición en redes de distribución, en función de su vida media. Esto se elimina en el Plan definitivamente aprobado en 2013. También se establecía la obligatoriedad de la elaboración de los “Planes de gestión de la demanda” como instrumento de gestión y control de la misma, de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/2003, que sólo se mantiene para aquellos casos en que las pérdidas en las redes superen el 30 %.

En el Plan aprobado en 2011, se establecían unos objetivos de pérdidas porcentuales en las redes de distribución, de modo a alcanzar un 15 % en 2027. En el Plan actual no se plantea alcanzar dicho porcentaje, ni siquiera en esta fecha.

3. Conclusiones

3.1. El nuevo texto propuesto, permite un incremento de extracciones, tanto en zonas costeras como en masas de agua en riesgo, prorrogables y excepcionables.

Disminuye la protección del Dominio Público Hidráulico, tanto frente a contaminación puntual como a la contaminación difusa, así como por la desprotección de los sondeos, al eliminar la obligatoriedad de las normas técnicas de ejecución de los mismos.

Deja el camino abierto para la desprotección de los ecosistemas.

La Administración Hidráulica hace dejación de sus obligaciones, al trasladar constantemente las mismas a otras administraciones.

Se incumplen diversos aspectos normativos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, del Reglamento de Planificación Hidrológica y

diversa normativa autonómica todavía en vigor y de especial importancia para la salud de las personas y la protección de los acuíferos.

Se burla el proceso de participación pública realizado durante la redacción del Plan aprobado inicialmente en 2011, especialmente el proceso de participación activa, ya que la mayoría de las sugerencias y alegaciones incorporadas se eliminan o se banalizan. La burla es mayor porque en la exposición de motivos de la Normativa aprobada en 2013, se dice: “...*Las aportaciones que los diferentes agentes de la sociedad civil han hecho llegar a la Administración Hidráulica de las Illes Balears a través de los talleres de participación que han tenido lugar en la fase de redacción del Plan*”. Y se citan estos talleres en el art. 3.1, a como Plan de Participación Pública fases I, II y III, que se corresponden con la realizada para la elaboración del Plan aprobado inicialmente en 2011 y que en la práctica, se ha ignorado en la elaboración de la nueva Normativa.

En un Plan con profundas modificaciones respecto al aprobado inicialmente en 2011, se utiliza el mismo *Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)*, complementado con un Anejo que reconoce explícitamente, que existen modificaciones sustanciales que pueden producir efectos negativos y se elabora una nueva Memoria Ambiental que banaliza estos aspectos. Dada la importancia de los cambios y su posible afección a los ecosistemas y a la calidad y cantidad de los recursos, se debería haber realizado una nueva Evaluación Ambiental Estratégica.

Se dificulta, si no se imposibilita, el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco.

3.2. Se pone en cuestión claramente, la utilidad del informe del Consejo Nacional del Agua en los Planes de Cuencas intracomunitarias. Si este informe se centra exclusivamente en el control de legalidad de los artículos 40. 1, 3 y 4 y el art. 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y no entra en otros contenidos legales o técnicos que afectan al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, aprobando una Normativa en 2011 y prácticamente, su contraria, en 2013, podría sustituirse la intervención del CNA por una certificación de legalidad de los servicios jurídicos de la Cuenca.

Lo mismo podría decirse del Consejo de Ministros, aunque en este caso puede justificarse por el hecho de que todos los Planes Hidrológicos del Estado se aprueben con el mismo rango legal.

Finalmente, en ambos casos se deja a la Comisión Europea, la responsabilidad del análisis del cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en los distintos Planes Hidrológicos de estas cuencas intracomunitarias y su validación final.

3.3. La Comisión Europea es pues, la única responsable de hacer cumplir la DMA en las cuencas intracomunitarias. Pero teniendo en cuenta la experiencia, las posibles sanciones afectarán a otros políticos que no han sido responsables de los incumplimientos. A la vista del sentido institucional de nuestros políticos, en estas condiciones, no les preocupa nada incumplir, pues “cuando lleguen las sanciones, si llegan, yo ya no estaré”.

La actitud de la Comisión Europea ante el PHIB y posiblemente otros, será una piedra de toque que indicará a los técnicos o funcionarios responsables de elaborar los futuros planes, la conveniencia o no, de enfrentarse a decisiones políticas que incumplen la DMA y cualquier criterio técnico racional, pero que sirven a intereses económicos muy concretos.

Según sea la actitud de la Comisión Europea, es posible que en un futuro, estos funcionarios se nieguen a asumir los riesgos de enfrentarse a decisiones y manipulaciones políticas contrarias al cumplimiento de la DMA y otras directivas.

Así será en el caso de Baleares, si la Comisión Europea valida finalmente, el Plan Hidrológico aprobado en el 2013 y no recupera los principios del Plan aprobado en 2011. Si se permite que primen los criterios políticos que defienden intereses concretos de grupos de presión y no los de los ciudadanos y del Dominio Público Hidráulico: *señores de la Comisión Europea, no nos hagan perder el tiempo y las energías.*